ÍNDICE

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES 9 DE OCTUBRE DE 2017

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

NÚMERO		IDENTIFICACION, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
182/2014	CONTRADICCIÓN DE TESIS SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO. (BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.)	3 A 36 EN LISTA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

**SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES 9
DE OCTUBRE DE 2017**

ASISTENCIA:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

SEÑORES MINISTROS:

**ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
EDUARDO MEDINA MORA I.
JAVIER LAYNEZ POTISEK
ALBERTO PÉREZ DAYÁN**

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 11:50 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 94 ordinaria, celebrada el jueves cinco de octubre del año en curso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a su consideración el acta, señoras Ministras, señores Ministros. Si no hay observaciones, ¿en votación económica se aprueba? (**VOTACIÓN FAVORABLE**).

QUEDA APROBADA.

Continuamos, por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

**CONTRADICCIÓN DE TESIS 182/2014,
SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y
SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO.**

Bajo la ponencia es del señor Ministro Medina Mora y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO. SÍ EXISTE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DENUNCIADA.

SEGUNDO. DEBEN PREVALECER CON CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN EL ÚLTIMO APARTADO DE ESTA RESOLUCIÓN.

TERCERO. DESE PUBLICIDAD A LAS TESIS JURISPRUDENCIALES QUE SE SUSTENTAN EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 220 DE LA LEY DE AMPARO.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. En la ocasión en que se vio este asunto, se habían puesto a su consideración los primeros considerandos relativos a los antecedentes, a la competencia, a la legitimación y a los criterios denunciados. Si no hay alguna otra observación, ¿en votación económica se aprueban? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

APROBADOS EN LOS TÉRMINOS DE LA SESIÓN EN QUE SE PRESENTARON.

Está a su consideración también el considerando V, respecto de la existencia de la contradicción de tesis. Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Ministro Presidente. No coincido con la existencia en rigor, sino con el tema de la materia. Estoy en la página 19 del proyecto, y en el párrafo 58, que pertenece a este considerando V, —que usted sometió a nuestra consideración— se hace una pregunta, que es la siguiente: “¿Se actualiza la prohibición de efectos retroactivos de la jurisprudencia prevista en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, en el caso de que una vez que se ha reconocido en un acuerdo admisorio del juicio de amparo la personalidad de un autorizado legal en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, se aplique una jurisprudencia emitida con posterioridad a esa admisión en la que se considere que tal autorización es insuficiente para interponer el amparo, a pesar de que no exista una jurisprudencia previa que sostenga lo contrario?”

Cuando se discutió este asunto, —en las ocasiones en que lo hemos hecho— me pareció correcta la pregunta que, para este asunto planteaba la señora Ministra Luna, y que —básicamente— se resumía a decir: ¿es posible aplicar una jurisprudencia emitida con posterioridad a la admisión en la que se considera que la autorización otorgada a una de las partes no es suficiente para interponer la demanda? Me parece que este es el tema estricto de la contradicción; y visto desde esta perspectiva, me parece que la respuesta debe partir del problema procesal del cambio de criterio dentro de la misma secuela procesal para sobreseer en el juicio a pesar de que antes ya se le hubiera admitido.

En este sentido, me parece que el colegiado no podía revocar su propia determinación acerca de la admisión; el tribunal no puede cambiar su criterio en la misma secuela procesal, sino que se encuentra vinculado hasta la emisión de la sentencia, sin posibilidad de poder revisar las etapas ya precluidas del mismo proceso.

Esta consideración, por ende, es independiente al problema de retroactividad. No estoy de acuerdo ni con el planteamiento de la materia ni con la forma en que se resuelve el asunto ni con las tesis que se nos están proponiendo, por lo cual votaré en contra del proyecto. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias. Continuaríamos con la existencia de la contradicción de tesis, señores Ministros, señoras Ministras. ¿Alguna observación respecto del planteamiento de la existencia de la contradicción, conforme al proyecto? No hay observaciones. Tome la votación nominal, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: En contra.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: En este punto, con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: A favor.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE AGUILAR MORALES: Con el proyecto.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de diez votos a favor de la propuesta del proyecto en este considerando V.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: APROBADO CON ESTA MAYORÍA.

Continuaríamos, entonces, por favor, señor Ministro Medina Mora.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Muchas gracias señor Ministro Presidente, agradezco a usted y a todos los integrantes de este Tribunal Pleno la oportunidad de abordar este tema. Esta es la tercera vez que nos avocamos al estudio de este asunto; me parece que hay, como ha quedado evidenciado en las discusiones de las Salas, en contradicciones de tesis resueltas en la Primera y en la Segunda Salas, y en asuntos que también se han visto en este Tribunal Pleno, y algunos que tenemos por decidir en los próximos días que se relacionan directa y esencialmente con el mismo tema.

Es un tema de la mayor complejidad, que fue introducido cuando en el Congreso de la Unión se hizo una reforma al proyecto de la nueva Ley de Amparo, y se introdujo esta prohibición en la parte final del artículo 217, de que no es dable aplicar una jurisprudencia de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna.

Ha habido una gran discusión sobre este tema, y en las Salas hemos tenido oportunidad de abordar sobre el mismo; cuando se hizo y se planteó la primera vez esta contradicción de tesis, se había turnado al Ministro Franco; esta contradicción se pasó por petición del Ministro Franco a Primera Sala, puesto que el punto concreto de contradicción se refería a un asunto mercantil de la competencia de la Primera Sala.

El Ministro Alfredo Gutiérrez hizo un trabajo espléndido, él pidió traer al Pleno, esa propuesta no fue aprobada, y se retornó a su servidor, se presentó una primera vez, y el planteamiento que estaba aprobado en esa ocasión no se ratificó, es por esto que lo vemos el día de hoy.

Me parece que ha sido afortunado que lo veamos el día de hoy y que no lo hayamos necesariamente resuelto entonces porque, me parece que hemos ido madurando como Tribunal Pleno y como Salas los criterios alrededor de este asunto. Lo que he tratado de hacer es minimizar en el proyecto la consideración doctrinal o teórica para tratar de resolver los problemas concretos que, me parece es a lo que estamos obligados para darle seguridad jurídica a los justiciables.

Asumo que este asunto todavía no está —necesariamente— resuelto en términos de los criterios del Tribunal Pleno y, por consecuencia, seré muy cuidadoso y abierto a las consideraciones que aquí se planteen por cada uno de mis colegas, y tratar de construir —digamos— sincréticamente una tesis, un proyecto que recoja el sentir mayoritario de este Tribunal Pleno y, sobre esa base, aterrizarlo a la resolución del problema concreto y, desde luego, poner el engrose —en su caso— a consideración de los integrantes de este Tribunal —como es obvio y obligado— pero, me parece —en este caso— más pertinente.

Además, —obviamente— hay también oportunidades de precisar —digamos— la redacción para efectos de evitar cualquier tipo de ambigüedad interpretativa. En ese ánimo, presento este proyecto el día de hoy.

Haré una presentación general, —como decía— la primera vez que vimos este asunto fue el veinticinco de mayo de dos mil quince que, conforme al proyecto presentado por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien de nuevo reconozco su contribución y su trabajo, puesto que la primera parte de este proyecto — digamos— hasta el párrafo 54, pues es literalmente lo que él había presentado entonces.

Ahí se planteó la idea de resolver esta contradicción de tesis para responder a tres preguntas que generaban los puntos de contradicción de tesis. La primera era: ¿Los criterios jurisprudenciales se aplican en cualquier determinación judicial, independientemente de la fecha en que hayan sido emitidos los actos o hechos sujetos a revisión o sólo pueden aplicarse respecto de actos o hechos ocurridos de manera posterior al dictado de tal criterio jurisprudencial?

La segunda pregunta es en relación con el contenido y alcance del principio previsto en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que se actualice dicha retroactividad en perjuicio de una persona?

Por último, una vez que se reconoció en un acuerdo admisorio en un juicio de amparo la personalidad de un autorizado legal en términos del artículo 1069 del Código de Comercio para interponer una demanda de amparo a nombre de su autorizante, ¿es posible aplicar una jurisprudencia emitida con posterioridad a esa

admisión en la que se considera que tal autorización no es suficiente para interponer la demanda de amparo?

El veintidós de febrero de dos mil dieciséis, este Tribunal Pleno – en el proyecto presentado por mi ponencia– determinó –digamos– revocar la resolución anterior y considerar que el punto de contradicción tenía que limitarse a determinar específicamente si se actualizan los efectos retroactivos de jurisprudencia que prohíbe el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a si una vez que se reconoció en un acuerdo admisorio del juicio de amparo la personalidad de un autorizado legal en los términos del artículo 1069 del Código de Comercio para interponer una demanda de amparo a nombre de su autorizante, es posible desconocer dicha personalidad al aplicar la jurisprudencia de la Primera Sala, de rubro: “AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.”

Por lo tanto, con base en el artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala que los proyectos se deben presentar en una segunda vuelta, de conformidad al sentido que haya votado la mayoría, se estima que, en este caso, se cumple el tercer requisito para que se actualice una contradicción de tesis, ya que los argumentos de contradicción dan lugar a la formulación de una pregunta genuina respecto de la manera de abordar el tema jurídico planteado, la cual es: “¿Se actualiza la prohibición de efectos retroactivos de la jurisprudencia prevista en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, en el caso de que una vez que se ha reconocido en un acuerdo admisorio del juicio de amparo la personalidad de un autorizado legal en

términos del artículo 1069 del Código de Comercio, se aplique una jurisprudencia emitida con posterioridad a esa admisión en la que se considere que tal autorización es insuficiente para interponer el amparo, a pesar de que no exista una jurisprudencia previa que sostenga lo contrario?” Esa es la pregunta que se plantea, – digamos– conforme lo discutido en esa sesión.

El proyecto parte de la premisa de que los efectos retroactivos de la jurisprudencia no son una cuestión que verse sobre los derechos adquiridos por las partes en un proceso jurisdiccional, sino en un límite legislativo al alcance y efectos de los criterios jurisprudenciales del Poder Judicial Federal susceptibles de ser interpretados conforme sus propias reglas.

Primero, se define cuándo es que la jurisprudencia tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, que determina que esta condición se verifica en aquellos casos sobre los cuales la jurisprudencia que se aplica, a un caso concreto, tiene efectos sobre cuestiones pasadas, que no pueden ser modificadas al haber sido enjuiciadas previamente dentro de un proceso jurisdiccional, de conformidad a un determinado criterio jurisprudencial.

Así, la prohibición sólo puede actualizarse en aquellos casos en los cuales la jurisprudencia, que se aplica a un caso concreto, tenga efectos sobre cuestiones pasadas que no puedan ser modificadas y no propiamente que exista una prohibición para aplicar una determinada jurisprudencia que ha sido creada de forma posterior al inicio de la secuela procesal en la que se pretende aplicar.

Una vez definido lo anterior, el proyecto señala que la jurisprudencia, como fuente formal del derecho, que tiene sus

propias reglas de creación y que tiene ámbitos específicos de aplicación, tiene por objeto el de integrar o complementar las normas jurídicas que los jueces federales interpretan.

El análisis de la prohibición de que la jurisprudencia tenga efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, debe hacerse en la lógica del sistema de creación y modificación de jurisprudencia que se verifica mediante los procedimientos de reiteración de criterios, contradicción de criterios y sustitución de jurisprudencia. Se trata de procedimientos específicos que dan nacimiento a la jurisprudencia, cuyo contenido es distinto y diferenciable a los supuestos jurídicos específicos resueltos en las sentencias que le dieron nacimiento, así como de las normas que explican.

En este orden de ideas, la jurisprudencia tiene características propias, y su operación se ordena bajo la racionalidad de ser un sistema de derecho creado para ser aplicado por todos los juzgadores dentro de procedimientos jurisdiccionales y que sólo puede dejar de ser aplicada en caso de que se interrumpa o sustituya de conformidad con las reglas del propio sistema.

Así, –por ejemplo– la jurisprudencia no puede ser sometida a un escrutinio constitucional o convencional y, por consiguiente, desaplicada por tribunales federales o locales.

Considero que la jurisprudencia debe ser acatada y aplicada en todos los casos concretos que se adecuen al supuesto que la misma contemple. La obligatoriedad de la jurisprudencia se construye a partir de la idea de respetar la igualdad de la aplicación del derecho, aplicando la misma solución jurídica a casos sustancialmente iguales con el fin de dotar de seguridad jurídica al sistema.

El proyecto continúa señalando, que la aplicación de las tesis de jurisprudencia se verifica al momento en que se actualice su hipótesis dentro del procedimiento jurisdiccional correspondiente.

Esta Suprema Corte, así lo ha entendido, al considerar que la jurisprudencia debe ser aplicada cumpliendo con la necesidad constitucional de una debida motivación y fundamentación. Los destinatarios de la jurisprudencia son: de forma directa, los tribunales que encuentran un criterio obligatorio para la resolución de la controversia en cuestión y, de forma indirecta, las partes dentro de dicha controversia. La obligatoriedad de la jurisprudencia se encuentra sujeta a tres criterios: el jerárquico, el de jerarquía y competencia territorial y el de temporalidad.

El proyecto considera que la prohibición de efectos retroactivos se entiende como una limitación al alcance temporal de los nuevos criterios jurisprudenciales que produce el Poder Judicial de la Federación; en este sentido, el criterio de temporalidad determina que el juzgador debe aplicar la jurisprudencia que se encuentra vigente al momento de emitir su fallo, de manera que si al momento en que ha de dictar la resolución no existe algún criterio que le vincule, dicho juzgador está en libertad de hacer uso de su autonomía interpretativa.

La función jurisdiccional es retroactiva por definición, puesto que opera bajo la premisa de juzgar mediante la aplicación de supuestos de normas jurídicas de todo tipo, hechos ya pasados. Una jurisprudencia con efectos retroactivos presupone la existencia de una jurisprudencia previa, que delimite la misma hipótesis jurídica, que contempla la nueva jurisprudencia; así como que la nueva jurisprudencia derogue la vigencia de la anterior por alguno de los mecanismos previstos para tal efecto por la Ley de Amparo, al haber seguido los procedimientos formales para su

modificación o extinción; por tanto, no puede existir una problemática de retroactividad sin una jurisprudencia previa, ya que la prohibición de efectos retroactivos de la jurisprudencia se debe entender como una regla que obliga a que un tribunal que ha generado una determinada jurisprudencia no pueda desconocerla una vez que ha sido aplicada a un caso concreto; a menos que la hipótesis planteada haya alcanzado el rango de cosa juzgada.

Todo tribunal se encuentra obligado por el criterio jurisprudencial que emitió en el pasado, respecto del caso concreto, y cualquier modificación al mismo, sólo será aplicada para casos futuros. Con lo que otorga seguridad jurídica al justiciable, el cual sabe que un criterio jurisprudencial, de un determinado órgano, que ya le ha sido aplicado, no le podrá ser modificado durante toda la secuela procesal.

Asimismo, el proyecto racionaliza que esta lectura del principio de no retroactividad permite dar predictibilidad a las decisiones judiciales, puesto que se exige regularidad a los criterios de órganos judiciales en la aplicación del derecho y una justificación razonada en caso de que se modifiquen los mismos.

El problema no es, entonces, si el órgano emisor de la jurisprudencia puede o no cambiar de criterio en un momento dado; sino resolver cómo debe proceder en caso de que una jurisprudencia que haya sido aplicada pierda su vigencia cuando aún se encuentra vivo el proceso al que le fue aplicada.

El proyecto considera que, cuando la aplicación de la jurisprudencia durante el trámite de un proceso judicial ha dado lugar a que determinadas decisiones adquieran firmeza, es evidente que el juzgador no estará en aptitud de aplicar posteriormente –dentro del mismo juicio ni en ulteriores

instancias– un criterio diferente de la misma jerarquía que haya superado al anterior.

Si la jurisprudencia ha sido aplicada de forma obligatoria por un tribunal como parte de la fundamentación de una resolución dentro del proceso, existe una individualización de la misma, por lo cual el cambio de jurisprudencia que rija a dicha determinación, siempre que sea emitida por el mismo tribunal, en cualquier tema posterior de este procedimiento o incluso durante el juicio de amparo, implicaría que se dieran efectos de carácter retroactivo a la nueva jurisprudencia.

En este supuesto existirá la obligación de no modificar la jurisprudencia vigente que haya sido efectivamente aplicada en el procedimiento jurisdiccional correspondiente y no hacer retroactivos los efectos de la nueva jurisprudencia, siempre y cuando este último depare un perjuicio a la parte a la cual le debería ser aplicado; por el contrario, si el derecho en disputa aún se encuentra sujeto a revisión, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario o extraordinario, como el amparo que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sentenciado, el órgano jurisdiccional que conozca de éste debe aplicar el criterio novedoso, si le es obligatorio por razón de jerarquía o competencia para resolver en esta instancia procesal, sin perjuicio de que, en instancias anteriores, se hubiere aplicado la interpretación que ha sido abandonada.

Cuando se trata de la aplicación de criterios que delimitan los alcances de adecuaciones sustantivas y la decisión sobre este tópico, aun es susceptible de análisis, sea porque no constituye cosa juzgada o porque no han sido afectadas de preclusión, el órgano jurisdiccional debe atender al criterio que prevalece al momento que resuelve el problema, en el que ve involucrada la

nueva interpretación, por ser ésta la que rige al momento de decidir el derecho.

En conclusión: la nueva jurisprudencia, además de no modificar los casos que le dieron origen, no puede ser aplicada a aquellos asuntos en los cuales se haya configurado por el juzgador el supuesto jurídico regulado, en atención a la jurisprudencia anterior dentro del proceso correspondiente.

Con este referente, sobre el funcionamiento de la retroactividad, la consulta se resuelve que no se está frente a un problema de efectos retroactivos de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.) de la Primera Sala, ya que no existe jurisprudencia previa que hubiese reconocido dicha facultad para —en ese caso— la autorizada en un juicio mercantil, sino simplemente una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que —incluso— podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares.

En este sentido, al no existir una definición respecto de la facultad del autorizado en los términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, para promover la demanda de amparo, el criterio adoptado en la tesis de jurisprudencia antes citada, puede válidamente aplicarse a casos que involucren actos o hechos pasados, sin que ello se entienda en perjuicio del quejoso, el cual —en todo caso— resiente un agravio derivado de la apreciación subjetiva del juzgador, mas no del reconocimiento de una condición procesal adquirida por una norma jurisprudencial.

En conclusión: consideramos que la jurisprudencia es una fuente de derecho creada para ser aplicada obligatoriamente por los jueces; es creada por los propios jueces, no es posible hacer un control de regularidad constitucional o convencional respecto de la jurisprudencia.

El problema de efectos retroactivos de la jurisprudencia presupone la existencia de una previa y una nueva que regule los mismos supuestos; la retroactividad de la jurisprudencia sólo puede verificarse en términos de las reglas de interrupción, modificación o sustitución a la misma; y los efectos retroactivos de la jurisprudencia sólo se actualizan en sus procesos de creación y no en la aplicación de criterios jurisprudenciales que hagan los operadores jurisdiccionales. El cuestionamiento de efectos retroactivos se actualiza al momento en que el órgano creador de la jurisprudencia decide modificarla.

La nueva jurisprudencia –resultado de un proceso de sustitución– no puede ser aplicada en perjuicio de las partes, en aquellos asuntos en los cuales se haya configurado el supuesto jurídico regulado en la jurisprudencia anterior y que el mismo sea cosa juzgada. En síntesis, es cuanto, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Está a su consideración. Señor Ministro Gutiérrez.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Gracias señor Ministro Presidente. En relación con este asunto, comparto la conclusión de la tercera tesis propuesta y la mayoría de sus consideraciones, pero me aparto de la primera y segunda tesis del proyecto, las razones son las que desarrollaré a continuación.

En primer lugar, –como comentario formal– respecto de las dos primeras tesis que abordan la materia general del principio de no retroactividad de jurisprudencia, estimo que, tal como lo refleja el proyecto en el apartado de existencia de la contradicción, existe votación de este Tribunal Pleno para que el asunto se circunscriba a analizar un punto en concreto, el ámbito temporal de validez de

la jurisprudencia sobre el alcance de la autorización, derivada del artículo 1069 del Código de Comercio, para efectos de la interposición de una demanda de amparo. Consecuentemente, estimo que sólo puede emitirse la tercera tesis propuesta, de acuerdo con lo votado por este Tribunal Pleno.

En segundo lugar, —como comentario de fondo— por lo que hace al contenido de la primera tesis propuesta, me aparto de la misma porque, si bien coincido en que no puede existir una problemática de retroactividad, sino una jurisprudencia previa, en el proyecto se dice que: “una jurisprudencia con efectos retroactivos se actualiza al momento en que un mismo órgano judicial sustituye una jurisprudencia previa que ya ha surtido sus efectos dentro de una secuela procesal específica”. A mi juicio, para efectos de la retroactividad de la jurisprudencia, no es relevante quién es el órgano creador de la jurisprudencia y si éste es quien sustituye o no su jurisprudencia; lo que es relevante es que exista una jurisprudencia vinculante para el juzgador, independientemente del órgano creador, y si la jurisprudencia posterior causa un perjuicio a la seguridad jurídica de una persona que actuó conforme al contenido de la jurisprudencia previa.

En tercer lugar, en relación con la segunda tesis propuesta, tampoco comparto su contenido porque condiciona la existencia de los efectos retroactivos de la jurisprudencia, a que la autoridad haya aplicado la primera jurisprudencia en un auto, resolución o sentencia, y que esa determinación jurisdiccional goce del carácter de cosa juzgada.

En la tesis se dice que “solo en aquéllos casos en los que lo decidido en un auto, resolución o sentencia en que se aplicó la anterior jurisprudencia aún no se encuentre resuelto en definitiva, podrá aplicarse la nueva jurisprudencia que la sustituya, y a

condición de que su contenido forme parte de la materia de la litis en conflicto”.

Desde mi perspectiva, la contradicción de tesis 91/2015 y en el amparo directo 44/2014, casos resueltos por la Primera Sala, en donde se hizo un pronunciamiento sobre el principio de no retroactividad de la jurisprudencia, mi voto no se condicionó a que la retroactividad de la jurisprudencia dependa de que dicho criterio jurisprudencial haya sido aplicado efectivamente por la autoridad judicial. Me parece que, de esas resoluciones, se desprende una idea, de que lo importante es proteger la seguridad jurídica de las personas que apegaron su conducta a una jurisprudencia previa, independientemente de que esa conducta haya o no sido reconocida y aplicada por una autoridad judicial.

Por lo tanto, considero que la forma en que debe analizarse la retroactividad, la jurisprudencia y el momento en que se analizan los efectos retroactivos, debe depender de cómo se define el perjuicio al que alude el artículo 217 de la Ley de Amparo. En otras palabras, un efecto retroactivo de la jurisprudencia en perjuicio, surge cuando la aplicación de la nueva jurisprudencia incide de manera directa en la seguridad jurídica de una persona, la cual había adquirido una certeza sobre el estatus de su esfera jurídica a partir del conocimiento previo y definitivo de cierto contenido normativo o la adquisición de ciertos derechos conforme a una jurisprudencia previa; ello, siempre y cuando el aspecto normativo a debate no sea propiamente la litis del asunto.

Así las cosas, me separo de lo previsto en los párrafos 62, 63, 74 a 82 del proyecto, porque matizan lo resuelto en los citados precedentes –91/2015 y 44/2014 de la Primera Sala–; incluso, en el párrafo 80, el proyecto está haciendo alusión a un posible caso

de aplicación retroactiva en beneficio, lo cual no forma parte de la materia de la contradicción de tesis.

Ahora bien, en relación con la tercera tesis, comparto la conclusión del proyecto sobre el ámbito temporal de validez de la jurisprudencia de la Primera Sala, 1a./J 97/2013 (10a.), al no existir una jurisprudencia previa sobre el tema; sin embargo, lo hago a partir de las premisas que acabo de señalar. Muchas gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Señora Ministra Piña

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias señor Ministro Presidente. En este asunto voy a votar en contra en función del contenido de las consideraciones que lo están rigiendo. Como fue votado, aquí el problema de la contradicción es establecer si existe o no aplicación retroactiva de la tesis del autorizado en materia mercantil, sin la existencia de una jurisprudencia previa.

Comparto con el proyecto el hecho de que, para que se pueda hablar de aplicación retroactiva de jurisprudencia tiene que haber una jurisprudencia previa; en este caso, no existe una jurisprudencia previa y, por lo tanto, no puede haber aplicación retroactiva por sus propios méritos. Hasta ahí me quedaría.

¿Por qué no comparto las afirmaciones que con posterioridad se dan en el proyecto? En el proyecto se afirma, a fojas 74, 75, 79, 80, 81, entre otros, que el tribunal que ha generado la jurisprudencia no puede desconocerla una vez que ha sido aplicada a casos concretos, y no lo comparto porque estas afirmaciones son incompatibles con el funcionamiento del sistema de jurisprudencia por reiteración y su mecanismo de interrupción,

que es —precisamente— el dictado por parte del tribunal que ha generado la jurisprudencia de una resolución incompatible con esta, es decir, el tribunal que generó la jurisprudencia sólo puede interrumpirla en casos concretos, no en abstracto y para el futuro, como afirma el proyecto.

Por lo tanto, no puede afirmarse que el tribunal que generó la jurisprudencia tiene prohibido desconocerla una vez aplicada, pues la propia Ley de Amparo le faculta para hacerlo, interrumpirla y por buenas razones; es decir, cuando crea que el balance de razones sustantivas o institucionales que dieron lugar a ese criterio es incorrecto; por lo tanto, se justifica desplazar —en el caso— las exigencias de seguridad jurídica que obligan *prima facie* a seguir sus propios precedentes para privilegiar aquéllas.

Esto es, si la razón de la interrupción o sustitución de la jurisprudencia es porque el propio tribunal constitucional —ya sea colegiado o esta Suprema Corte o la Primera Sala— considera que hay razones sustantivas suficientes para interrumpir esa jurisprudencia, se van a privilegiar estas razones en perjuicio de la seguridad jurídica que se pretende, el fin último de acatar la jurisprudencia; y es esto lo que se va a privilegiar, las razones sustantivas.

Por otra parte, las afirmaciones relativas a la cosa juzgada en el procedimiento, considero que deben ser problematizadas. Hay determinados presupuestos procesales, como la legitimación —en este caso— que se reconocen provisionalmente durante el procedimiento, por ejemplo, al admitir la demanda, pero que —en principio— pueden ser revisadas —incluso de oficio— por los órganos jurisdiccionales en la sentencia y resolución a los recursos, ya que la definición de los presupuestos procesales —

por lo general— debe hacerse en la sentencia porque es el momento deliberativo adecuado.

Esto es relevante porque generará un problema cuando la situación procesal relativa a un presupuesto procesal se haya definido aplicando una jurisprudencia que sea sustituida en el *inter* —que no es el caso— aquí únicamente no existía jurisprudencia.

Ahora, el hecho de que en la admisión del amparo se le haya reconocido legitimación, considero que no es cosa juzgada ni es un presupuesto procesal. El propio tribunal, al revisar el asunto, en la sentencia, aun sin la existencia misma de la jurisprudencia, si vio que la admisión que hizo de la demanda, el presidente del tribunal colegiado —porque es el presidente, no es el órgano colegiado el que hace la admisión— incurrió en un defecto, en el sentido de haber admitido una legitimación que no era suficiente, no creo que la admisión por parte del presidente del tribunal colegiado no pueda ser revisada por el órgano colegiado.

Lo que nos imponen las tesis de jurisprudencia de esta Suprema Corte, —a los jueces constitucionales —a todos— y a nosotros mismos— es que, en caso de que se haya admitido una demanda de amparo por falta de legitimación y que el órgano jurisdiccional —actuando en Pleno— considere que no es adecuada, es precisamente prevenir al quejoso, en este caso, para que acredite la personalidad, tomando en cuenta el criterio del propio colegiado, pero no necesariamente es cosa juzgada.

Para mí, la justificación de la existencia de la jurisprudencia es — en efecto— generar seguridad jurídica; no obstante, la seguridad jurídica es un valor sólo si, y en la medida en que sirve para proteger valores sustantivos.

Sin embargo, dado que es posible que una jurisprudencia haya hecho una apreciación inadecuada de los derechos sustantivos involucrados, el sistema prevé mecanismo para corregir estos errores, como la interrupción y la sustitución de jurisprudencia. El uso de estos mecanismos implica —por definición— que en los casos en que se interrumpe o sustituye una jurisprudencia previa, se da preferencia a los aspectos sustantivos sobre la seguridad jurídica, aunque el nuevo criterio deba universalizarse.

En este sentido, tampoco comparto las afirmaciones que se sostienen en el proyecto, porque ello implicaría establecer un criterio que impediría a los tribunales colegiados interrumpir su propia jurisprudencia en los casos que juzgan cuando adviertan que su contenido era incorrecto; es decir, contrario a lo que se afirma en el proyecto, los tribunales colegiados no pueden interrumpir su jurisprudencia en abstracto y para el futuro, sino sólo dictando una sentencia en contrario, como lo establece la propia Ley de Amparo; por lo tanto, —a mi juicio— debe buscarse una interpretación del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, que concilie la prohibición de retroactividad con el funcionamiento de los distintos mecanismos para crear y modificar jurisprudencia.

En conclusión: creo que, en el caso concreto, —a mi juicio— no hay necesidad de pronunciarnos sobre distintos temas, porque si partimos de la premisa de que, para que haya aplicación retroactiva de jurisprudencia debe existir una jurisprudencia y, en este caso, no la hubo, no hay aplicación retroactiva de jurisprudencia.

Estoy en contra porque todas las consideraciones que sustentan el proyecto y que creo que, en términos de la existencia de contradicción, que se ha fijado, no son necesarias, no las

comparto en su totalidad; por lo tanto, votaría en contra del proyecto. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señora Ministra. Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Ministro Presidente. Como lo señalaba al votar, no el tema de la existencia, sino el tema de la materia, que está en el párrafo 58 del considerando V.

No coincido ni con la solución ni con lo que se está planteando aquí. ¿Por qué? Porque, –efectivamente– leí la pregunta que está en la página 19, párrafo 58, se presenta el problema de una aplicación o no aplicación retroactiva de la jurisprudencia, cuando el propio proyecto, página 29, hablando de la tercera tesis, dice: “En el caso concreto, no se está frente a un problema de efectos retroactivos de la tesis de jurisprudencia referida, ya que no existe jurisprudencia previa que hubiese reconocido dicha facultad –eso ahorita lo voy a señalar– para el autorizado en un juicio mercantil, sino simplemente una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares. En este sentido,” etcétera.

Entonces, creo que el problema aquí no es tanto si se aplica o no la jurisprudencia, sino cuál es el sentido de definitividad que tienen las resoluciones que han tomado los propios órganos jurisdiccionales en un determinado momento.

Tuvimos en la Sala una contradicción de tesis 91/2015, sostuve un criterio ahí, en el sentido de que no necesariamente tenía que haber tesis jurisprudencial previa o jurisprudencia previa para poder generar la condición de retroactividad; entonces, ese primer

elemento no lo comparto; creo que existen condiciones procesales, –las vamos a ver a lo largo de esta semana y probablemente de la que entra, en los distintos asuntos, no voy a abundar en ellas ahora– en los cuales una cosa son esas condiciones procesales y otra es la condición jurisprudencial de existencia de tesis previa, simplemente me pronuncio en este caso.

Aquí, me parece que el asunto es más –insisto– de una firmeza de las decisiones y de la posibilidad de revocarlas o no, conforme a ese propio voto; en tercer lugar, no está en el proyecto expresamente, pero en su intervención el señor Ministro Medina Mora lo hizo claro; él considera que tampoco los órganos jurisdiccionales pueden cuestionar la regularidad constitucional o convencional de la propia jurisprudencia, cosa que creo que es factible.

En consecuencia, no coincido ni con la determinación de la materia ni con los tres puntos de abordaje que tiene este asunto y que están reflejados –a su vez– en estas tres tesis. Básicamente, los he señalado, –insisto– habrá temas mucho más complejos que seguramente veremos desde el siguiente asunto que está propuesto quedar sin materia, y creo que vamos a tener discusión, después vienen varios otros en este mismo tenor, y ahí trataré de exponer mi criterio pero, estando a discusión exclusivamente este asunto, me manifiesto en contra del mismo. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. ¿A su consideración, señora Ministras, señores Ministros? ¿No hay más participaciones? Señor Ministro Laynez.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias señor Ministro Presidente. Creo que el tema que abordamos hoy es un tema, me parece sumamente complejo.

La complejidad deriva –sobre todo– de que no es lo mismo hablar de un criterio jerárquico, donde en los casos que veremos ante este Pleno, no sólo éste, sino los siguientes tres que veríamos a continuación, en su caso, estamos hablando siempre de cambio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Cuando al analizar el artículo 217, nos lleva a ver qué pasa en los plenos de circuito o en los tribunales colegiados; lógicamente el problema —en mi punto de vista— se agudiza, desde el momento en que tenemos un circuito, –por ejemplo– donde tengamos tres o cuatro tribunales de circuito y sólo uno tiene jurisprudencia.

Si pensamos qué es lo que sucede cuando una junta —por ejemplo– local de conciliación y arbitraje o el tribunal de justicia administrativa— se sujeta en su resolución y lo fundamenta en una jurisprudencia de un colegiado que le obliga, porque es la jurisprudencia del circuito, pero que otro justiciable, en idénticas circunstancias, su asunto llegará a un colegiado o que no tiene jurisprudencia o que simplemente va a decir que a él no le obliga la jurisprudencia de otro tribunal de la misma jerarquía.

Pero esto es sólo para ejemplificar la dificultad de establecer una tesis general, me parece en materia del artículo 217, que sea absolutamente aplicable en todas las distintas situaciones. Digo, –afortunadamente, insisto— los casos que tenemos son de jurisprudencia del Pleno.

Prácticamente, todas las construcciones teóricas desde los siglos XIX y XX, que siguen siendo la base de la discusión

contemporánea en materia de retroactividad, buscaron —en mi punto de vista— hacer frente al perjuicio que puede causarse en situaciones jurídicas preexistentes cuando se modifica una norma.

Entiendo que este Pleno decidió no entrar —y no lo haré tampoco— a la cuestión de si la jurisprudencia es norma o no, pero me parece que subyace el análisis de cuándo se ocasiona un perjuicio, y ahí coincido con el Ministro Gutiérrez, sobre la importancia del análisis del perjuicio.

En este sentido, y refiriéndome concretamente al proyecto, reconozco y coincido en este esfuerzo del proyecto por acercar el análisis de retroactividad al reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas; de ahí que estoy de acuerdo con el criterio de esta efectiva aplicación de la jurisprudencia, y ahora me voy a referir en dónde están mis diferencias.

También —como una condición de certidumbre— coincido en que, para estar en presencia de un supuesto de aplicación retroactiva, es necesaria la existencia de una jurisprudencia previa. Quiero decirles que aquí es una variante, he tenido con mis colegas de la Segunda Sala esta discusión, en algunos casos había sostenido: estoy convencido que, en el caso de la norma legislativa, no se requiere —insisto— que exista ni siquiera una regulación previa para que pueda haber una aplicación retroactiva de una norma, pero tomando en cuenta el carácter de la jurisprudencia y, sobre todo, la funcionalidad de la que nos hablaba la Ministra Norma, creo que para hablar de retroactividad de la jurisprudencia es necesario —en este punto he variado mi posición— el que exista una jurisprudencia previa.

¿Dónde no coincido? ¿En dónde no me aparto? En dos situaciones o dos elementos fundamentales, que también ya han

sido señalados aquí, el carácter de jerarquía; es decir, de que solamente pueda haber retroactividad de un órgano de la misma jerarquía en la jurisprudencia que emitió otro órgano de la misma jerarquía.

Porque eso nos llevaría —insisto— a hacer abstracción del elemento fundamental que es el perjuicio. Si en un caso hipotético hay una jurisprudencia de un pleno de circuito, que fue individualizada, ya sea en un juicio ordinario o en un juicio original o a través del amparo, y que hay una individualización —al caso concreto— en la secuela procesal, aun cuando esté *sub judice*, ya sea por vía de algún recurso se llegue a otra instancia y en el *inter*, la Primera o la Segunda Salas o el Tribunal de la Suprema Corte emite jurisprudencia que va a contrariar la jurisprudencia del Pleno de Circuito, claro que creo que aplica el principio de jerarquía, y que la jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte tienen el efecto derogatorio sobre esa jurisprudencia pero, a futuro, a partir de su emisión; y el análisis que se hace del perjuicio tiene que hacerse —precisamente— en la individualización que se le dé a la norma.

Desgraciadamente, este primer asunto no nos ayuda mucho para eso, lo vamos a ver en el tercero porque —y digo el tercero, porque el segundo quedaría, en su caso, sin materia— vamos a ver —precisamente— la individualización de una jurisprudencia determinante en un conflicto laboral desde la junta y un cambio de la jurisprudencia de la Segunda Sala; pero no me adelanto a eso, pero he sido consistente.

En la Segunda Sala me he apartado del criterio, perdón, no quiero decir que me aparto del criterio de jerarquía; claro que existe la jerarquía en la aplicabilidad de la jurisprudencia pero, creo que para efectos de retroactividad, —para mí— puede haber casos que,

habiendo sido individualizada una jurisprudencia a un quejoso o en un juicio original o primario de un colegiado o de un Pleno de Circuito, poco importa la jerarquía de quien sustituye la jurisprudencia, creo que si se analiza el perjuicio se puede llegar a la conclusión que hay retroactividad. Me apartaría de ese punto y –desde luego– del siguiente, que es el de cosa juzgada, porque –si bien entendí– el proyecto lo que nos propone es que tendrían que ser solamente en situaciones inatacables. En situaciones inatacables no veo cómo puede haber una secuela procesal, donde venga una aplicación retroactiva de jurisprudencia; si es atacable, no habría esa oportunidad.

Para mí, –insisto– es como –déjenme decirlo de manera muy coloquial– la fotografía que se toma, en la individualización de la jurisprudencia que implica ¿cuál es el régimen jurídico que aplica el juzgador?, en ese momento, no sólo el normativo, el legislativo, sino el jurisprudencial que lo llevaron a tomar esa decisión, sobre todo, lo estamos viendo en el ámbito de derecho adjetivo pero, igual, lo vamos a analizar luego en materia sustantiva; por cierto, también, todos los casos que tenemos aquí son –creo– en materia adjetiva y no sustantiva.

Por eso, me aparto del proyecto; comparto únicamente –e insisto– y es una variación a mi postura en la Segunda Sala pero, creo que debe de haber una jurisprudencia previa, que es la diferencia con la norma, con una norma legislativa, creo que aquí tiene que haber una jurisprudencia previa, considero que la jurisprudencia es una herramienta de interpretación, pues lógicamente me parece que tiene que ver una jurisprudencia anterior.

No comparto el criterio de que tenga que ser del mismo órgano, de la misma jerarquía de órgano, ni tampoco de que tenga que ser

únicamente en situaciones inatacables o calificadas de cosa juzgada. Gracias Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Está a su consideración. Les recuerdo, señoras y señores Ministros, que a la una tenemos una sesión privada, por lo que es previsible que continuemos con la discusión de este asunto el día de mañana. Señora Ministra Luna.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Ministro Presidente. Este asunto –como bien lo han mencionado– se ha discutido en varias ocasiones en este Pleno; ha tenido –incluso– retornos y, al final de cuentas, se nos está presentando ahora un proyecto; quiero recordar que ya aprobamos un punto de contradicción, que creo que de aquí debemos de partir, en primer lugar.

El punto de contradicción que aprobamos dice lo siguiente: “el punto de contradicción se tenía que limitar a determinar específicamente si se actualizan los efectos retroactivos de la jurisprudencia que prohíbe el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo si una vez que se reconoció en un acuerdo admisorio del juicio de amparo la personalidad de un autorizado legal en términos del artículo 1069 del Código de Comercio para interponer una demanda de amparo a nombre de su autorizante, es posible desconocer dicha personalidad al aplicar la jurisprudencia de la Primera Sala de rubro:” el que conocen.

Entonces, lo importante es: se están o no actualizando los efectos retroactivos que prohíbe el artículo 217 de la Ley de Amparo. En los asuntos que habíamos discutido con anterioridad se dijo que no se iba analizar la naturaleza jurídica de la jurisprudencia, se votó y se perdió esa votación; al final de cuentas, me sigue

pareciendo que es una norma jurídica *sui generis*, pero es una norma jurídica. Bueno, eso es para después de la muerte, porque se perdió la votación. Entonces, ahora, se ciñó el punto de contradicción a esta parte.

Considero que el proyecto que nos presenta el señor Ministro Medina Mora puede tener un proyecto corto o un proyecto largo, dependiendo de lo que este Pleno considere, y tiene que ser a la votación de este Pleno, porque tenemos muchas tesis de contradicción, que en aras de establecer una tesis ilustrativa o una tesis que –de alguna manera– establezca el criterio que esta Suprema Corte quiere expresar respecto de determinado concepto, pues en muchas ocasiones se han forzado ciertas contradicciones de tesis un poco más allá de lo que es la contradicción de tesis en aras de lograr –precisamente– esa tesis que ilustra sobre el concepto respectivo.

En este caso concreto, creo que no tendría que forzarse tanto, porque –de alguna manera– está hablándose de cuál es el efecto retroactivo que se establece en el artículo 217, y si la idea es determinar cuál es el efecto retroactivo, pues no veo mal si se determina en una tesis qué es lo que se entiende por este efecto retroactivo. Ahora, que estemos o no de acuerdo con lo que se dice, es otra cosa, pero –efectivamente– podríamos hacerlo.

En un primer punto, el proyecto del señor Ministro Medina Mora, creo que todos coincidimos, y el proyecto lo dice de manera clara, contundente y precisa. Para que exista un problema de retroactividad en términos del artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo, se necesita que haya una tesis de jurisprudencia que haya sido modificada; si no existe, pues no podemos hablar de ningún problema de retroactividad.

Entonces, si queremos un proyecto corto, pues ésta puede ser hasta aquí la conclusión de la propuesta, y decir: en el presente caso, no hay ningún problema de retroactividad. ¿Por qué razón? Porque no había una tesis de jurisprudencia previa que –de alguna manera– estableciera un criterio distinto al que se determinó por la Primera Sala; el primer criterio que se establece, es el que aplicaron en estos asuntos.

Entonces, que si bien es cierto que admitían la demanda con base en el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, no había un criterio jurisprudencial establecido por la Primera Sala en este sentido; porque para empezar, –lo que se ha dicho– para hablar de que esta jurisprudencia se tiene que modificar, pues tendría que ser modificada por el mismo órgano. Entonces, si estamos hablando de una jurisprudencia de la Primera Sala, la sustitución o modificación tendría que haber sido por la Primera Sala, no por lo que establecieran los tribunales colegiados, que –de alguna manera– lo han aplicado. Entonces, no hay otra tesis. La Primera Sala interpretó el artículo 1069 del Código de Comercio, y dijo: no es posible aceptar la demanda por el autorizado, no tiene legitimación.

Entonces, aquí se estableció este criterio, ¿hay aplicación retroactiva o no del 217?, pues creo que todos los que han intervenido han estado de acuerdo con la postura del señor Ministro Medina Mora, en el sentido de que, para que podamos hablar de retroactividad, tiene que haber un cambio, y no lo hubo. El Ministro Cossío no estuvo de acuerdo, porque creo que en la Sala tiene un criterio diferente, bueno, hay un voto en contra pero, de ahí en fuera, creo que la mayoría de los que han participado han dicho que, para que haya un problema de retroactividad, necesita haber un cambio en la jurisprudencia; aquí no lo hay.

Entonces, pues podríamos, primero, preguntar. ¿Nos quedamos con el proyecto corto? Y hasta aquí la tesis de jurisprudencia, donde se diga: aquí no hay un problema de retroactividad establecido en el párrafo tercero del artículo 217 de la Ley de Amparo. ¿Por qué razón? Pues porque no había otra tesis de jurisprudencia que se haya modificado. Y hasta ahí podemos terminar.

Ahora, si lo que se pretende también es ilustrar cuáles son los conceptos de retroactividad que establece el artículo 217 para poder determinarlo, pues entonces podríamos entrar al análisis de las siguientes tesis. Propondría, —señor Ministro Presidente, señora y señores Ministros— que se hiciera una primera votación de esta primera parte del proyecto, que si estamos o no de acuerdo con que, para que haya retroactividad, en términos del artículo 217, exista una tesis previa que sea modificada o sustituida por otra que cambia ese criterio. Si la mayoría opina que sí debe haber una tesis, pues aquí hay un criterio importante en relación con el punto de contradicción que se planteó desde un principio.

Y la siguiente pregunta tendría que ser: ¿nos quedamos hasta aquí o continuamos con los criterios en los que se determina qué se entiende por retroactividad y en qué casos puede darse la retroactividad? Propondría eso: en el caso de que llegáramos a determinar si hay que continuar con lo demás y con el sustento de las otras dos tesis del proyecto. Bueno, pues —entonces— ya podríamos dilucidar cada una de ellas y plantear nuestras posiciones.

Propondría: —si es que el señor Ministro Presidente, la señora y los señores Ministros consideran conveniente— podríamos hacer un primer alto en esta parte, hacer una primera votación y, luego

proponer, hasta aquí nos quedamos, esto resuelve el punto de contradicción, se concluyó y se hace la tesis al respecto. No, da para establecer criterios relacionados con ¿cómo opera el problema de retroactividad? Bueno, pues continuamos con la siguiente parte del proyecto y las otras dos tesis y externamos nuestro criterio. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Le voy a dar la palabra a la señora Ministra Piña, pero creo que es importante conocer la opinión del señor Ministro ponente, porque entendí —en algún comentario que hizo— que no consideraba necesario o conveniente fraccionar el criterio y que nos pronunciáramos respecto de la construcción de alguno de los criterios que se proponen. Señora Ministra Piña.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias. Estaría de acuerdo con la propuesta de la Ministra Luna pero, al margen de que esté de acuerdo o no, creo que se tendría que hacer una votación al respecto, porque creo que la mayoría —salvo el Ministro José Ramón— partimos del supuesto de la existencia de una jurisprudencia previa para que se pueda hablar de aplicación retroactiva de jurisprudencia y no solamente de aplicación, que sería aplicación de jurisprudencia. Creo que todas nuestras inquietudes van en cuestión del fondo del asunto y cómo se trató.

Pero, posteriormente, vamos a ver la contradicción de tesis 217/2016, que es también del Ministro Medina Mora, y en donde se da la hipótesis concreta de que hubo un cambio de criterio de jurisprudencia en materia laboral. Este precedente que viene listado con el número 3, trata exactamente el punto de contradicción; la existencia de una jurisprudencia de la Segunda Sala en materia laboral y su cambio con posterioridad, y ahí fue cuando los colegiados tuvieron que tomar una decisión de si

procedía o no la aplicación no retroactiva, atendiendo al caso concreto.

Entonces, no es una cuestión de que lo vayamos a dejar de analizar o que no quede claro, sino lo tenemos que analizar y lo tenemos que ver, precisamente en el asunto número 3, que también es del Ministro Medina Mora; entonces, compartiría la propuesta de la Ministra y, para ser más ágil este Pleno, pues que se tome votación para ver si nos quedamos hasta ahí o seguimos, simplemente. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Zaldívar ¿una aclaración?

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Perdón, señor Ministros Presidente, simplemente quiero hacer una exhortación. Faltamos de pronunciarnos cinco Ministros, incluyéndolo a usted; la propuesta era pronunciarnos sobre el proyecto en su totalidad, respetuosamente pediría que hasta que nos pronunciáramos todos pudiéramos ver si se vota en conjunto o si hay necesidad de hacer una votación fraccionada porque, de tomarse ahorita esas decisiones nos dejarían fuera de la posibilidad de haber hecho un pronunciamiento –sobre todo– del proyecto a los que no hemos hablado. De manera muy respetuosa, sería mi solicitud. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias señor Ministro Presidente. En tanto las participaciones que tuve en los asuntos que se vieron con anterioridad, coinciden esencialmente con el proyecto del señor Ministro Medina Mora, que somete a la

consideración de este Tribunal Pleno, expresó estar de acuerdo con el contenido del mismo en cuanto lo hacen por sus tesis 1 y 3, que son las que resuelven exactamente el problema planteado; esto es, no existiendo jurisprudencia anterior, no hay modo de considerar que la aplicación de un nuevo criterio resulte de carácter retroactivo.

El segundo punto —como aquí se ha expresado— seguramente será tratado por todos en los siguientes temas; esto es, si debe la modificación corresponder al mismo órgano en cuanto a jerarquía para considerar que hay o no aplicación retroactiva.

Desde ahora, —anticiipo— me sumo a los criterios que han sido expresados por el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, por el Ministro Laynez Potisek, en el sentido de que, en tanto el criterio que determinó una cierta circunstancia, le era obligatorio al juzgador, cualquier cambio posterior le resulta retroactivo, independientemente de que éste proviniera de un tribunal colegiado, de un Pleno de Circuito, de una Sala o de la propia Suprema Corte.

Razón por la cual, estoy de acuerdo con los puntos 1 y 3, que son los que toman como base la existencia de una jurisprudencia anterior o no, para determinar allí la jurisprudencia retroactiva. Como soy de los que piens,— junto con la Segunda Sala— de que la condición para tal efecto es la existencia de una jurisprudencia anterior, y no es el caso, estoy de acuerdo con el proyecto en las tesis 1 y 3, no con la 2, por las razones ya expresadas.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Señor Ministro Medina Mora.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Me parece —y ese fue el pedido que hice— que sería muy imprudente que todos los señores Ministros, integrantes de este Tribunal Pleno, se manifiesten. No tengo —como dije al principio— objeción en ajustar el proyecto o el engrose al criterio mayoritario del Pleno; no se trata de asumir una construcción doctrinal que, —como ha dicho, con toda razón la Ministra Piña— tal vez quede para la posteridad de nuestros nietos, y no nos dé para resolverlo en vida; evidentemente, este asunto puede irse resolviendo, abordando preguntas muy concretas o generando una aproximación más general y más comprensiva, preferiría escuchar al resto de los señores Ministros.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muy bien. Pues faltando ocho minutos, sugiero que, para que podamos —inclusive— tener la continuidad de los argumentos y, en su caso, contraargumentos en este diálogo institucional que generamos, les pediría que levantemos la sesión, a continuación vayamos a la sesión privada.

Los convoco, desde luego, a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá lugar el día de mañana, en este recinto, a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 12:55 HORAS)